



REVISTA POLÍTICA LATINOAMERICANA
Publicación digital semestral
ISSN: 2618-530X
Director: Mario Toer
<https://politicalatinoamericana.org/revista>

**JAQUE AL NEOLIBERALISMO EN LA CALLE: EL ESTALLIDO DEL
MOVIMIENTO INDÍGENA EN ECUADOR Y DEL MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL EN CHILE**

**CHECK TO NEOLIBERALISM ON THE STREET: THE OUTBREAK OF THE
INDIGENOUS MOVEMENT IN ECUADOR AND THE STUDENT
MOVEMENT IN CHILE**

Francisco Cano López

Estudiante de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid nacido en 1998 en Palma de Mallorca (España). Correo: 100366463@alumnos.uc3m.es

RESUMEN

El presente artículo pretende analizar pormenorizadamente el reciente estallido de los movimientos indígena, en Ecuador, y estudiantil, en Chile, del pasado mes de octubre. Estos movimientos han sido capaces, aparentemente, de articular una serie de demandas de la sociedad que ponen en cuestión o bien medidas neoliberales, o bien, un sistema económico y social neoliberal de dos sociedades que presentan muchas semejanzas. Se estudiarán, desde una perspectiva histórica y coyuntural, la forma y los motivos por los que estallan dichos movimientos, así como las demandas que proponen de cara al modelo al que se enfrentan. Para ello, también se recurrirá al análisis de la caracterización de los propios movimientos, de su participación política en las últimas décadas. Con todo, se tiene por objetivo a lo largo del artículo, entender las similitudes y diferencias de dos estallidos sociales coyunturales que ponen a Latinoamérica en el objeto de análisis mundial del pasado mes de octubre del año dos mil diecinueve.

Palabras Clave:

Ecuador, Chile, neoliberalismo, movimiento estudiantil e indígena

ABSTRACT

This article intends to analyze in detail the recent outbreak of indigenous movement in Ecuador as well as the student movement in Chile, which began last October. These movements have apparently been able to articulate a series of demands of societies which indeed question either neoliberal measures, or a neoliberal economic and social system of two societies that have evident similarities. The form and the reasons which explain why these movements have exploded, as well as the demands they propose regarding the model they are facing, will be studied from a historical and short-term perspective. In order to do so, the analysis of the characterization of the movements themselves and their political participation in recent decades will also be used. As a whole, the objective of the article is to understand the similarities and differences of two short-term social outbreaks that put Latin America in the object of global analysis this past October of the year 2019.

Key Words:

Ecuador, Chile, neoliberalism, student and indigenous movement

1. Introducción

En el pasado mes de octubre estallaron los movimientos indígena y estudiantil en Ecuador y Chile, respectivamente. Tras decisiones puntuales de los gobiernos de ambos países y la inmediata reacción de la sociedad civil, se abrió en América Latina un escenario de importantes protestas semejantes y al mismo tiempo, diferentes. Aparentemente, motivados por razones similares (y a su vez, diferentes), los movimientos tomaron las calles de dos países separados por 3.000 kilómetros de distancia con contundencia y con especial fuerza en sus capitales y principales ciudades.

El viernes 4 de octubre de 2019, el movimiento indígena en Ecuador, actualmente dirigido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), junto con un movimiento popular mucho más amplio, estalla tras el anuncio de la quita del subsidio a los combustibles y de un conjunto de medidas (calificadas de “paquetazo”) que el presidente Lenin Moreno (Alianza País) decretó el primero de octubre para responder a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto suponía, entre otras cosas, un aumento del coste del transporte y un encarecimiento del coste de vida. Según informa la Secretaría de Gestión de Riesgos y emergencias (dependiente del gobierno de Ecuador), la misma jornada del 4 de octubre reflejó la contundencia de la toma de las calles por parte de la sociedad ecuatoriana con 381 puntos de protesta, 215 vías afectadas y 13 parcialmente cerradas, amplio paro de transportes y miles de personas del movimiento indígena volcadas al paro, cuyos voceros informaron acciones en 17 provincias del país.

Tan solo unos días más tarde, durante la semana del 14 al 18 de octubre, el movimiento estudiantil en Chile, en protesta contra el alza del precio del metro, convocó una “evasión” masiva en el metro de la capital, esto es, acceder sin pagar el boleto como forma de protesta bajo la consigna de “evadir, no pagar, otra forma de luchar”. Esto fue solo el inicio, puesto que, después de ser catalogada de “vandalismo” por parte del presidente Sebastián Piñera (*Chile Vamos*), cinco días más tarde, la “evasión” y la ola de revueltas se extendió más allá del metro y derivó en la quema y saqueo de varios establecimientos, incluido el edificio corporativo de una de las principales empresas de energía de Chile. El resultado es que desde el 18 de octubre una masiva protesta social sacude Santiago y el resto de Chile, y en la que amplios sectores medios y de las clases

populares han concurrido a manifestar su rechazo al modelo neoliberal vigente en forma de grandes marchas, “cacerolazos” multitudinarios y enormes destrozos, saqueos e incendios en estaciones del tren subterráneo, supermercados y multitiendas. (Salazar Vergara, 2019).

Dicho lo cual, una de las preguntas que nos deberíamos plantear es ¿qué pasó para explicar un levantamiento, y una furia social muy parecida, casi sin precedentes, en la historia reciente de ambos países, lideradas por dos movimientos sociales que han tenido un papel importante en las calles y en la política en las últimas décadas? Este es el principal objetivo del presente *paper*: analizar los estallidos sociales de ambos países mediante el estudio de los aspectos de los movimientos estudiantil chileno e indígena ecuatoriano que sean útiles para entender el actual rol de dichos movimientos que han mostrado su oposición frente a medidas neoliberales, en el caso de Ecuador, y frente a un sistema neoliberal, en el caso de Chile.

Este fenómeno, ocurrido en el mes de octubre en los dos países de la costa del pacífico de la región, resulta de suma relevancia en el ámbito de la acción colectiva de los movimientos sociales. En Chile, se habla del “«reventón social» más extendido, violento y significativo que ha vivido el país en toda su historia” (Salazar Vergara, 2019) y de Ecuador, de una lucha callejera de altísima participación de sectores populares no organizados, similar al espíritu de las resistencias populares a las medidas neoliberales de los 90s, según informa el fotoperiodista Luis Herrera de la Agencia de noticias Redacción. Es todavía pronto para establecer con claridad cuáles han sido las consecuencias a largo plazo de la acción de las revueltas sociales en ambos países, sin embargo, sí es posible señalar las inmediatas implicaciones que se han derivado de la misma en las calles: la marcha atrás de las tentativas iniciales de ambos gobiernos e, incluso, por parte de Piñera, el mostrar disposición de ir un paso más hacia la mejora de la distribución. Es, pues, de especial relevancia el análisis detallado de la caracterización de la movilización social liderada por estos dos movimientos, así como de sus efectos debido a su “éxito” inmediato y el potencial mensaje que puede transmitir en movilizaciones futuras.

Resulta pertinente, pues, la presencia de un artículo como el presente, que pretende analizar cómo y por qué dos movimientos sociales, aparentemente tan dispares, como el movimiento indígena ecuatoriano y el movimiento estudiantil chileno, han mostrado con tal contundencia en las calles, su hartazgo a un neoliberalismo, fruto por un lado, de la herencia del pinochetismo y de las reformas estructurales de los Chicagoboy, o por el otro, del endeudamiento que ha conllevado a la concesión de un préstamo del FMI. Un neoliberalismo que, si bien o impregna el íntegro sistema político, social y económico chileno, o se materializa en medidas de ajuste fiscal como las que pretende impulsar Lenin Moreno, estos movimientos sociales pretenden, por lo mínimo, cuestionarle su hegemonía. Y aquí, su pertinencia en dicha revista.

2. Similitudes y diferencias de ambos movimientos

2.1. “Paquetazo” necesario y medida inevitable

Como relatábamos con anterioridad: hubo estallido, pero el relato de cada uno de ellos varía sustancialmente. Empezaremos por Ecuador para entender cual fue el aparente motivo o la medida que llevó al movimiento indígena a liderar la desobediencia civil y posteriormente, el que llevó al movimiento estudiantil a hacer lo mismo en Chile.

Durante casi todo el periodo correísta, concretamente, de 2007 a 2014 el gasto público dinamizó el mercado capitalista mediante grandes obras de infraestructura, prestación de servicios y suministro de materiales y productos con grandes empresas, así como la incorporación de un número significativo de trabajadores a la nómina del Estado. Sin embargo, la presente coyuntura se precipitaba porque, en 2014, las condiciones que permitieron el incremento del gasto público desaparecieron: caen los precios de las principales mercancías de exportación, la deuda externa toca el límite constitucional, se contrae la dinámica del mercado capitalista y la tributación. El resultado es un déficit de 8 mil millones de dólares anuales, una quiebra de las finanzas estatales que hace que difícilmente el gobierno morenista tenga presupuesto para sostener la máquina burocrática en funcionamiento durante de dos meses. Como consecuencia, se ejecutan las medidas económicas que son, según el gobierno, condición necesaria para conseguir el financiamiento del FMI (Agencia RedAcción, 2019). Y así es como, en un contexto de economía dolarizada en el que los instrumentos de política monetaria son

inexistentes, Ecuador le pide al FMI 4.200 millones de dólares y a otros organismos multilaterales otros 6.000 millones para sanear sus cuentas fiscales. A cambio, se compromete a impulsar «reformas estructurales». Entre estas, destacamos como la supresión de los subsidios a la gasolina de 85 octanos y al diésel (el gasoil) como la más importante, pues es la que más contribuye al incendio iniciado a inicios del pasado mes. Según cifras gubernamentales, estos dan cuenta de 1.500 millones de dólares de los más de 2.000 millones que esperan recuperar con todas las medidas que conforman el llamado “paquetazo”. El diésel, que sirve para el transporte pesado de mercancías y para el transporte público de pasajeros, da cuenta de 1.170 millones, mientras que la gasolina, que afecta ante todo a los automóviles privados, de propiedad de 25% de la población, explica los 330 millones restantes. Para ser más claros: el gobierno decidió que el 75% más pobre de la población, que usa el transporte público, debía pagar 78% del costo de la eliminación del subsidio, mientras que el 25% más rico de la población debía pagar el 22% restante (Ospina, 2019). Además de esta medida, que será el motivo principal por el cual el movimiento indígena liderará posteriormente las protestas, este paquetazo también incluiría la reducción del salario real de todo el conjunto de trabajadores del sector público, una confiscación de un día mensual de salario, la eliminación de 15 días de vacaciones, un amplio programa de despidos ya iniciado en 2018, así como medidas de reducción de aranceles con el fin de abaratar los bienes importados. (Agencia RedAcción, 2019) .

A ello, hay que añadir el gran problema que vive Ecuador en estos momentos: el déficit de la balanza comercial y de la balanza de pagos. Como consecuencia de un régimen de dolarización que impide devaluar la moneda nacional, todo lo importado es más barato que lo producido por el propio país, por lo que, en un contexto de apreciación del dólar y devaluación generalizada en Latinoamérica, el país importa todo y lo que exporta es cada vez más difícil de colocar. Producir es caro, y la actuación del gobierno de Lenin Moreno no ha sido otra que la de pronunciar dicho problema de competitividad externa con medidas como la reducción de aranceles para que las importaciones de bienes de consumo se hagan más baratas o la reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas. Además, el problema de la competitividad se recrudece con el impacto inflacionario de la subida de 130% en el precio del diésel, cuyo principal efecto será el

aumento de los pasajes y del precio del transporte de todas las mercaderías. (Ospina, 2019).

Todo ello, responde a un giro a la lógica neoliberal en Ecuador que, con la *Ley de Fomento Productivo* en 2018, se evidencia una reconciliación del país con los mercados. Se trata de un pleno realineamiento con Washington, un giro del heredero de Correa agudizado tras la consulta popular de febrero que, aupada en el «combate a la corrupción», dejó al ex presidente sin opción de repostularse en unas futuras elecciones. Desde entonces, las viejas elites, el alto empresariado y la derecha partidaria intensificaron su asedio a Carondelet hasta desplazar a Alianza País (AP) del comando estatal con la escisión entre oficialistas y correístas, haciéndole perder a Moreno su mayoría parlamentaria y esterilizando a AP como partido de las mayorías. El complejo dispositivo de dicha ley no solo implantaba la austeridad fiscal, sino también una serie de instrumentos estatales, que se nos escapan del objeto de estudio de este trabajo, pero que rompen con la propia Constitución introduciendo un sistema internacional de arbitraje de inversiones para cualquier materia. (Ramírez Gallegos, 2018). No obstante, autores como Pablo Ospina (2019) dudan acerca de si realmente existe tal giro. Así, alude a que si la actual política económica ecuatoriana morenista puede ser legítimamente calificada como de “derecha”, es discutible que Moreno sea una representación de algún “giro”, porque a partir de 2014, fruto del fin del ciclo ascendente del precio de los commodities y, especialmente, del petróleo, la conducción económica de Rafael Correa ya había realizado un ajuste fiscal: el gasto del presupuesto general del Estado pasó de 44.300 millones de dólares en 2014 a 37.600 millones en 2016. Con la urgencia por obtener financiamiento a cualquier precio, Correa relegó cualquier gesto antiimperialista del pasado y Lenin Moreno continuó el mismo camino tanto en el incremento de los montos de la deuda como en la conciliación con los guardianes de la ortodoxia neoliberal.

A pesar de ello, en el Ecuador, la actual clase gobernante, pese a haberse postulado con un programa contrario al Consenso de Washington, ha llevado a cabo una agenda neoliberal como aparentemente, consecuencia necesaria y única alternativa ante “la crisis moral del correísmo”. Es por ello por lo que, se habla de la “necesidad” del retorno inconsulto de los mercados como principal mecanismo legítimo para combatir la

corrupción. Con todas las medidas neoliberales de Lenin Moreno durante sus primeros años de mandato, el régimen puede exhibirse como “descontaminado” del maldito populismo y un claro ejemplo de ello fue la destitución de autoridades por su cercanía al correísmo. La puesta en forma del neoliberalismo como necesaria salida ética ante los excesos populistas fue lo que utilizó el gobierno para avalar su giro gubernamental. Y aquí, es donde juega un papel muy importante la hasta ahora colaboración indígena con el gobierno de Lenin, al menos, hasta el estallido social del pasado mes, y pese a ser totalmente antagónica a las políticas pro mercado. Todo ello, porque para la izquierda antipopulista, luce más rentable implicarse en la descorreización que confrontar el ajuste. (Ramirez Gallegos, 2018).

En cambio, en Chile, la razón de ser de las medidas es distinta. En un aparente clima, descrito por el propio presidente Sebastian Piñera de “*oasis en la convulsionada América Latina*” semanas antes del estallido social, anuncia el alza del metro de 800 a 830 pesos (1,13 a 1,17 dólares) en las horas más transitadas y esto sería la chispa de un posterior estallido de enorme magnitud. La medida anunciada, que sería la vigésima alza del precio en los últimos 12 años, solo se entiende dentro de una lógica de institucionalidad que determina los precios del transporte público y que consiste en que un panel de expertos establece, a partir de una serie de variables económicas, las tarifas del transporte público. Se trata de una institución diseñada para mantenerse al margen de la política y se rige estrictamente por las condiciones de mercado. El precio del transporte obedece a las fuerzas inexorables del mercado y estas son tramitadas, de forma aséptica y aislada de la política por tecnócratas. Por ello, estos ajustes se defienden por ser “inevitables”. Inevitables, según el gobierno, por la subida del precio del petróleo y el alza del dólar. De esta forma, la política pública en Chile deja de ser política y deja de ser pública y así lo demuestra claramente, entre muchos otros, el problema de la educación chilena, que opera dentro de una competencia entre oferentes privados. En el país hay un tenso y delicado equilibrio que sostiene varias de las políticas públicas vigentes. Todas ellas se sostienen en un discurso de inevitabilidad técnica y en una fuerte dosis de inercia. Como resultado, vemos que todo movimiento social que reclama por una política pública, como lo lleva haciendo el movimiento estudiantil en las últimas décadas, en 2001, en 2006 o 2011, la política se refugia en la institucionalidad técnica o en la lógica de los mercados. Y cuando estas movilizaciones

alcanzan una masa crítica, terminan revelando los tipos de consenso social y político que existen tras la dinámica técnica-privada (Titelman, 2019).

Pese a que Santiago de Chile, tiene uno de los transportes públicos más caros del mundo, en términos reales el precio se ha mantenido relativamente estable desde 2015, aunque esta estabilidad se dio después de un aumento (por encima de la inflación) de casi 40% entre 2010 y 2015. Esta es una pequeña muestra de la forma en que ha funcionado el modelo económico y social de Chile, que le ha permitido ser uno de los países más ricos –y al mismo tiempo desiguales– de América Latina. (Titelman, 2019). No obstante, el alza de los boletos del metro fue solo la “gota que rebalsó el vaso”, se trata de una aparente nimiedad pero, que cuando la “opresión” sobre la ciudadanía total es múltiple y llega a un punto barométrico extremo, cualquier bengala, por aparente insignificante que pueda parecer, puede producir el estallido de una crisis larvada y alargada por demasiado tiempo (Vergara Salazar, 2019). Por ello, debemos recalcar que fueron 30 pesos los que dieron lugar al estallido iniciado por el movimiento estudiantil y seguido por la amplia sociedad chilena, pero fue el problema de la desigualdad estructural de la sociedad, que se ha vuelto insostenible, y la acumulación de abusos y alzas en los servicios públicos de luz y transporte, de salud (sobre todo, medicamentos), viviendas e incluso de productos de primera necesidad, los que hicieron permanecer las protestas en las calles hasta el día de hoy. Entre una larga lista de razones, también hay que señalar una razón política: existe la impresión de que nada se puede cambiar por más que los ciudadanos se movilicen por miles, siempre y cuando, no cuenten con el beneplácito de la derecha o del gobierno de turno. Ello es fruto, en primer lugar, de la herencia de la dictadura pinochetista (1973-1988) que implicaba que la política fuera monopolio de los poderes de facto, especialmente del gran empresariado y de los partidos políticos, y en segundo lugar, de la exclusión de las grandes mayorías, que con la democracia continuaron siendo vistas como “objeto de políticas públicas” (administradas por tecnócratas) y nunca como sujeto con derecho a la participación y a la iniciativa del pueblo (Garcés, 2019).

En definitiva, mientras que, en Ecuador, Lenin Moreno pretende implementar el llamado “paquetazo” neoliberal por considerarlo necesario para cumplir con el préstamo de FMI, y así, poder pagar la deuda del país en contraposición a su programa electoral,

en Chile, Sebastián Piñera aludirá a la inevitabilidad de la lógica del mercado y de la tecnocracia para justificar el alza del precio; esto es, la institucionalidad neoliberal, heredada de Pinochet, que precisamente lo que pretendía era, en palabras de Jaime Guzmán (intelectual de la constitución chilena promulgada bajo la dictadura en 1980), constreñir a los adversarios progresistas para que el margen de alternativas sea lo suficientemente reducido.

2.2.El estallido y las demandas

Una vez analizada la razón por la cual se produce la desobediencia civil, es preciso analizar el estallido en sentido estricto, las diferentes maneras en la transcurrieron las protestas en ambos países y el papel que desempeñaron el movimiento estudiantil en Chile y el indígena en Ecuador, así como la similar reacción de los distintos gobiernos y el conjunto de demandas de esa gran movilización social.

Como indicábamos en la introducción de este trabajo, todo empezó con los estudiantes secundarios y su llamado a “evadir”, poniéndose de este modo, a la vanguardia de las luchas sociales en la sociedad chilena tal y como lo demostraron en las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011 (Garcés, 2019). El gobierno, sin embargo, reaccionó como ya lo había hecho ante estas protestas previas, y el presidente las catalogó como una forma de vandalismo, criminalizando así, la protesta (Titelman, 2019). No obstante, pese a que esta vez, desde muchos sectores, se criticó la “evasión” porque la subida de precios de Metro no afectaba a los estudiantes, éstos respondieron rotundamente que, de todas formas, sí afectaban a sus familias y con ello, lograron dos claras victorias: sumaron a sus madres y padres a las protestas y le quitaron el discurso a Piñera y la derecha que sostienen “la defensa de la familia” como uno de sus pilares fundamentales. Con ello, conseguían una mayor participación de la sociedad con especial énfasis de los jóvenes de los barrios populares, que vieron en el estallido una forma de expresión popular, primero contra el metro, símbolo del orden y el Estado, y luego, contra el capital, esto es, contra los supermercados, las farmacias, los bancos y multitiendas, que representan al mercado. (Garcés, 2019). Lo llamativo de la estrategia del gobierno frente a las protestas fue su torpeza en lo tardía y errónea que fue su respuesta, si consideramos, además, que el propio Piñera tuvo que lidiar con los estudiantes universitarios durante su primer mandato en 2011 en la llamada rebelión de los

pingüinos, lo que fue, para muchos, la razón por la que el primer gobierno de derecha desde el fin de la dictadura no pudo entregar el poder a otro del mismo signo y terminó entregándolo a una coalición de centroizquierda llamada Nueva Mayoría. (Titelman, 2019).

Por primera vez desde que volvió la democracia tras la dictadura, el Estado chileno, en la noche del día 18, con el fin de “garantizar la seguridad”, decretó el Estado de Emergencia y toque de queda total en Santiago. La mayor sorpresa para el gobierno fue que, pese a ello, pese a la presencia de los militares en las calles, el Estado de Emergencia fue desafiado y desobedecido, y las movilizaciones continuaron adquiriendo dos formas. Por un lado, el caceroleo y ocupación de plazas y las “marchas” en provincias y, por el otro, saqueos en los barrios de Santiago e importantes ciudades a lo largo del país. Y es que la protesta se extendió a las provincias y se hizo nacional, con mayor intensidad en Valparaíso y Concepción, las dos ciudades mayores después de Santiago. (Garcés, Mario 2019)

El caso ecuatoriano es bastante similar, aunque con ciertas distancias. La génesis de la protesta también radicaba, como en Chile, en el transporte. El incremento de más del 120%, provocó un alza en la tarifa del transporte público y, por ende, la reacción de los ecuatorianos fue la de apoderarse, en cuestión de horas, de las calles de varias ciudades del país. Esto fue el catalizador de la movilización, aunque se puede observar como el malestar popular comenzó a expresarse días antes con la sorprendente movilización que se convirtió en un paro provincial en el Carchi, provincia de la frontera norte cuya economía está profundamente afectada por el ingreso de productos colombianos, tal y como señalábamos anteriormente; se trataba de una previa expresión de protesta que no sucedió en Chile. Tras el jueves 3 de octubre, la movilización se extiende en todo el país, lo que se traduce en cortes de carretera, ocupaciones de dependencias de las gobernaciones, de las instalaciones petroleras, de comisarías e incluso, momentáneamente, de la Asamblea Nacional, así como en una huelga general durante 11 días convocada por la CONAIE, aunque, primeramente, lo fue por las bases de los trabajadores transportistas que, pese a que sus dirigencias habrían acordado con el gobierno morenista de ponerle fin, la mantuvieron convocada. Como resultado, Lenin Moreno decretó el Estado de Excepción por 60 días con un toque de queda nocturno y,

actuando, de este modo, con la misma “mano dura” de la que después Piñera haría uso, como ya indicamos, para hacer frente a las movilizaciones con un Estado de Emergencia. Con ello, las fuerzas armadas (FF.AA) se desplegaron, del mismo modo que en Chile, por las principales ciudades ecuatorianas y se establecieron zonas de seguridad, así como se incrementó la presencia policial. El resultado fue claro: represión, detenciones, desapariciones, muertes y violaciones de derechos humanos, tal y como lo denuncia la CONAIE, y como efectivamente también ocurrió en Chile. A su vez, ascendía a centenares los militares retenidos en las provincias. Las columnas indígenas, pese a los intentos inútiles de contener su avance por parte de las FF.AA, llegaron a la entonces capital Quito siendo recibidas con aplausos por la población en las calles. Y este es un aspecto a tener en cuenta en nuestro análisis pues, una de las diferencias, con respecto al accionar del movimiento estudiantil chileno, es el territorio en el que tienen lugar las protestas. En el caso ecuatoriano, cuando los indígenas tomaron las riendas de las protestas, que no fue desde el principio, a diferencia del movimiento estudiantil en Chile que fue el que precisamente hizo estallar la protesta social, se repitió la misma estrategia de movilizaciones que en años anteriores. Esta estrategia pasaba por caminar desde sus comunidades (principalmente, desde la Sierra) hacia la capital, bloqueando a su vez las principales vías del país. En el caso de Chile, las manifestaciones comenzaron, como vimos, en el corazón de la capital, Santiago, concretamente, en el interior de las estaciones de metro más emblemáticas de la ciudad. Y, a pesar de que el rechazo inicial tenía que ver únicamente con el alza en el precio del metro santiaguino, con el transcurso de la rebelión, se extendió a otras regiones ciudades como Valparaíso, Concepción y La Serena. Esta diferencia entre Ecuador y Chile deja al descubierto que finalmente en el caso chileno, casi todo sucede en Santiago, que adquiere un rol preponderante. (Paul, 2019).

Mientras tanto, al igual que hizo Piñera, criminalizando las protestas en un primer momento, Moreno, insistió en el discurso de conspiración en su contra liderado por su predecesor Correa, negando, de este modo, ambos, la raíz popular de las protestas. Sin embargo, es la propia CONAIE, que nunca mantuvo una buena relación con Rafael Correa y su gestión, la que lo negó respondiendo: *«se deslinda de la plataforma golpista del correísmo, nuestra lucha es por la salida del FMI del Ecuador. No permitiremos a los que nos criminalizaron por 10 años aprovecharse de nuestra lucha y la del pueblo*

ecuatoriano». Con la llegada inminente de esas masas de indígenas a la capital, la represión no estaba en condiciones de contener el estallido de una verdadera insurrección y Lenin Moreno, a diferencia de Piñera, decide huir de la ciudad y trasladar la Casa de Gobierno a la ciudad de Guayaquil después de que el movimiento indígena rodeara el palacio de gobierno (Agencia RedAcción, 2019).

Tras una primera reacción de los gobiernos, exclusivamente represiva, la posterior respuesta fue distinta entre ellos, así como el transcurso de las subsiguientes movilizaciones. En el caso ecuatoriano, el gobierno decidió establecer una mesa de diálogo, mediada por la ONU y la Conferencia Episcopal, con los líderes indígenas. Esa es la razón por la que, en el caso ecuatoriano, las protestas se detuvieron casi inmediatamente después de que se estableciera dicho diálogo con los líderes indígenas, pese a la negativa de algunos de líderes de la CONAIE, reacios a aceptar el diálogo convocado por Moreno mientras continuase reprimiendo y manteniendo relaciones con el FMI y por ende, imponiendo medidas económicas neoliberales. Sin embargo, el 13 de octubre, tras once días de protestas, el Ejecutivo se echó para atrás y aceptó la demanda de la CONAIE con el fin de desmovilizar a miles de sus miembros que llegaron a la capital con el propósito de paralizarla, y se derogó el decreto presidencial 883, el llamado “paquetazo”. Con ello, los indígenas movilizados, que ya habían derrocado a tres mandatarios entre 1997 y 2005, obtuvieron una victoria algo “simbólica” que se vio reforzada en la creación de una comisión mixta para la elaboración de nuevo decreto. Las movilizaciones cesaron, los numerosos indígenas regresaron a sus casas en las distintas provincias del país y la calma volvió a reinar en las ciudades del país.

En Chile, el Gobierno también cedió ante la presión social que ejercían los miles de protestantes, pero, sin embargo, las reacciones fueron distintas. Aunque Piñera, anunciara el mismo sábado 19 la suspensión del incremento en el precio del transporte público, no se logró atenuar a los manifestantes. Ni siquiera el anuncio de una agenda social con una serie de reformas para tratar de responder a las “legítimas demandas”, así calificadas por el propio Piñera, surtieron efecto en el apaciguamiento. (Paúl, 2019) Esto ocurre por dos motivos que distancian los casos chileno y ecuatoriano: el primero, muy evidente, reside en la falta de un líder o de un grupo específico que pueda representar a la casi totalidad de la sociedad chilena que demanda un cambio; el movimiento estudiantil no es capaz de canalizar las demandas de toda la sociedad; y el

segundo, radica en la demanda de la movilización social, que es mucho más grande que la simple supresión del alza del precio del metro: se reclama un proceso constituyente para acabar con la Constitución pinochetista de 1980. Posiblemente, ambos motivos estén interconectados por lo que después desgarnaré: “la crisis de representatividad”.

En primer lugar, las protestas no tienen un líder o un grupo capaz de canalizar el gran número de demandas de la sociedad chilena. Es cierto que el movimiento de estudiantes hizo estallar todo, pero con el paso de los días, comenzaron a sumarse miles de personas de distintas edades y diferentes posiciones sociales (Paúl, 2019). No obstante, la presencia juvenil era mayoritaria y, pese a que éste sea un fenómeno universal, en parte, debemos destacar su connotación especial. Se trata de las nuevas generaciones que no vivieron en primera persona la dictadura y que, de una u otra forma, no son portadoras del “miedo” que acompañó a las generaciones que los preceden y ello, los hace partícipes de una nueva subjetividad más libertaria y ciudadana. Sin embargo, el estallido social posterior fue de lo más heterogéneo y variado, donde tanto los sectores más pobres como la clase media también participaron, representando esta última, un duro revés para la derecha y el gobierno que han pretendido validarse prioritariamente a través de estos sectores (Garcés, 2019). Esto es completamente distinto con lo ocurrido en Ecuador donde, a pesar de que las protestas las iniciaron los transportistas, fueron los indígenas, a diferencia de los estudiantes chilenos, quienes finalmente protagonizaron las manifestaciones masivas del país en tanto en cuanto han sido actores políticos clave en la historia reciente ecuatoriana, gracias a su capacidad de movilización y resistencia, tal y como explicaremos después (Paúl, 2019). La cultura organizativa y participativa del movimiento indígena es mucho más fuerte que la de la ciudadanía común en Chile, principalmente, como consecuencia de un largo proceso de monitoreo ideológico-cultural y centralización de las atribuciones propiamente políticas por parte del Estado durante la dictadura generando apatía y desmovilización en los ciudadanos. (Vergara, 1982). Es, precisamente, esa falta de cultura participativa y organizativa la clave para entender el éxito del movimiento indígena ecuatoriano para resolver y dialogar, a través de la consolidación de líderes sociales capaces de aglutinar los petitorios de la sociedad, algo que no ha ocurrido en ningún movimiento social en Chile, ni siquiera en el más asentado, el estudiantil. Al no haber ninguna posibilidad de canalizar el descontento, en parte, por la crisis de representación (más abajo explicada) lo que sucede es un efecto de

contagio, que hizo que muchas personas se sumaran con demandas de las más variadas. Como resultado, en ausencia de las formas tradicionales para canalizar el conflicto, el gobierno tenía que resolver el problema mediáticamente al no tener a nadie al frente para negociar. (Paúl, 2019). Es así, que el estallido en Chile es acéfalo, y con ello, nos referimos a que se hace sin un liderazgo consolidado, sin un convocante central (recordemos que el movimiento estudiantil es el primero en reaccionar, pero ello no les convierte en convocantes), sin orgánicas conocidas (ni partidos, ni coordinaciones territoriales), por lo que adquiere un cierto carácter de espontaneidad y, como todo movimiento social chileno, carece de instancias de coordinación y unificación suficientes (Garcés, 2019). En cierta forma, podemos observar que también el estallido ecuatoriano obtuvo una alta participación de los sectores populares no organizados que tenían una frustración acumulada desde los últimos años del *correísmo* donde se habían deteriorado las condiciones de estos. (Vogliano, 2019)

El segundo motivo por el que, hoy, todavía no han cesado las movilizaciones chilenas demuestra que la supresión de dicho aumento no era la demanda del estallido social, fue, tan solo, el catalizador. “No es por 30 pesos, es por 30 años” resume muy bien el sentimiento de la sociedad chilena en la calle y es que, las causas que hay detrás del estallido van mucho más allá del aumento del precio del boleto de metro, es un descontento que es acumulativo y que no tiene que ver únicamente con el transporte, sino con el sentimiento de discriminación, abuso y exclusión de los chilenos en su vida cotidiana (Paúl, 2019). Un abuso que se podría representar con absoluta claridad con la desigualdad del país: según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. Esto tiene que ver con el modelo neoliberal “de laboratorio” aplicado en Chile desde 1973 y consolidado por la actual Constitución de 1980 y que conlleva, paradójicamente, a que Chile sea uno de los países que más crece de América Latina, pero al mismo tiempo, el que más desigualdad tiene (Titelman, 2019). Los gobiernos neoliberales postdictadura, no hicieron más que completar y perfeccionar el modelo neoliberal original, aunque dándole una apariencia modernista, democrática y

futurista, y en palabras de Mario Toer (2018), atemperando las consecuencias de exclusión social.

En 1991, una encuesta pública realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, demostró que el 54% de los chilenos adultos rechazaba, no creía o no confiaba ni en el Estado, ni en los partidos políticos, ni en los propios políticos. Entre 2017 y 2019, las cifras de rechazo oscilaban entre el 80 y el 95%. Un ejemplo de esa desafección política se refleja en la escasa participación de la sociedad chilena en las elecciones, que a duras penas llega a la mitad del censo. Esto viene a decir que el modelo neoliberal chileno fue acumulando una absoluta crisis de representatividad que conllevó a que la ciudadanía chilena se convirtiera en un movimiento social de gente que tendía a pensar por sí misma y a adoptar posiciones políticas autónomas, con creciente independencia de los partidos políticos (Salazar, Vergara, 2019). Una crisis de representatividad, que se vio alimentada por un lado, por una centro-izquierda, la *Concertación* y después, *Nueva Mayoría*, que se había adaptado a dicha Constitución mediante la “elitización” de la política y la mercantilización de la vida social, adoptando, de este modo, lógicas neoliberales, y por otro lado, por la imposibilidad de un partido a la izquierda de la *Concertación* canalizador de todas esas demandas y con opciones de disputarle el poder a la derecha debido a un sistema electoral diseñado en la era pinochetista y que favorecía al bipartidismo. (Garcés, 2019). Las revueltas estudiantiles del 2001, 2006 y 2011, así como la marea feminista del 2018, reflejan esa ciudadanización de la política, y a su vez, ese distanciamiento y escisión de la clase política para con la sociedad. De hecho, la sorpresa por parte de los grupos de poder del estallido social fue reveladora de ese “desacoplamiento” de lo social y lo político, como señala Mario Garcés.

Por tanto, a diferencia de Ecuador, donde no existe una crisis de representatividad y la retirada del “paquetazo” representa no seguir avanzando por un camino neoliberal gracias, en parte, al contrapeso que ejerce el liderazgo del movimiento indígena y que no tiene la sociedad chilena, en Chile, la larga lista de descontentos es de tal enorme magnitud, que la sola retirada del aumento del precio del metro no es suficiente para combatir lo que la sociedad chilena entiende por “abuso”.

2.3. Papel de los movimientos en el pasado reciente

Para poder entender cual ha sido el papel en concreto de los movimientos estudiantil chileno e indígena ecuatoriano en este estallido social, se requiere, a grandes rasgos, de un análisis de cuál fue su papel en la política en las últimas décadas. En base a ese rol político que pretendemos explicar, se pueden llegar a entender numerosos aspectos interrelacionados con lo comentado en el anterior punto. Aspectos que viran, en Chile, desde la crisis de la representatividad a la necesidad de crear de una nueva centro-izquierda (Nueva Mayoría), su posterior fracaso o el surgimiento de un nuevo partido de líderes estudiantiles, Frente Amplio; y que viran, en Ecuador, desde el cambio constitucional a la redefinición del concepto de ciudadanía y la ruptura con el partido Alianza País.

En primer lugar, debemos centrarnos en las pasadas movilizaciones estudiantiles en Chile, especialmente, en la movilización de 2011. Con la demanda central de una educación pública, gratuita y de calidad, el movimiento estudiantil tomó una posición antagónica frente al sistema de educación existente. Lo que se denunciaba era la aplicación de la lógica del mercado en el ámbito educativo como consecuencia del abandono estatal que, a su vez, conllevaba al endeudamiento de las familias, hecho generador de más desigualdad social. Las manifestaciones de 2011 son la cúspide de un proceso de (re)construcción del movimiento estudiantil desde principios de siglo que está marcado por un cambio generacional: jóvenes que nacieron en la época de la transición a la democracia y que denuncian los importantes déficit de la democracia chilena, lo cual se refleja en su autodefinición: «No somos hijos de la democracia, sino nietos de la dictadura». Los jóvenes se sienten unidos por un malestar compartido y gran parte de la sociedad se suma a las protestas porque se identifica con sus críticas, tal y como sucedió en el pasado mes de octubre. Y es que, el movimiento estudiantil ha sido históricamente un actor político clave en Chile tal y como también lo demuestran la rebelión de los pingüinos del 2006 o el mochilazo de 2001 (Schwabe, 2018). Precisamente, el malestar en Chile se anuda en el problema de la educación como símbolo de un descontento con las precariedades de los individuos frente al “sistema”. La educación se politizó e hizo sentido respecto al sistema financiero, respecto a los abusos del empresariado y la clase política, respecto a las propias dificultades de

existencia. La voluntad transformadora se consagró, por tanto, porque encontró una zona de visibilidad, como es la educación (Azócar, Mayol, 2011). Podemos constatar que los estudiantes en el 2011 lograron instalar un debate a gran escala sobre el lucro y la desigualdad en la educación, en el que, hasta octubre de este año, fue el movimiento social más grande desde el regreso de la democracia chilena. Y, efectivamente, obtuvieron la fractura en la hegemonía del momento, pero sin poder construir una hegemonía distinta que pudiese imponerse porque, además, como toda movilización social chilena, se enfrentaría con la institucionalidad de un sistema político ajeno a la sociedad civil. De esta manera, los estudiantes en ese año pudieron visibilizar un conflicto estructural, así como politizar toda una generación y repolitizar a un país. Con la demanda de entenderla como derecho social, se planteó que la educación no era un bien individual, sino una responsabilidad colectiva dentro de una sociedad, independientemente del estado jurídico de los establecimientos. (Schwabe, 2018). Las grandes movilizaciones, y en especial las de 2011, habían conseguido modificar la agenda nacional, y el programa político de Bachelet para su segundo mandato, bajo una nueva fórmula, heredera de la *Concertación*, *Nueva Mayoría*, que incluía al partido Comunista y a ex dirigentes estudiantiles como Camila Vallejo, asumió las reivindicaciones de la calle y definió tres grandes y necesarias reformas: constitucional, tributaria y educacional. (Ominami, 2018). Y, también, como consecuencia de las limitaciones institucionales, el 2011 fue el semillero de lo que nacería después: el Frente Amplio, la mayor novedad en la política chilena de los últimos años que nace tras la decepcionante y pretendida “gestión transformadora” de Bachelet. Se trata de una nueva coalición de partidos y colectivos de izquierda encabezada por exdirigentes estudiantiles que alcanzaron una importante representación parlamentaria en las elecciones de 2017 y que según señala Mario Garcés (2019), ha tenido un desempeño mediocre en el parlamento ya que no ha logrado constituirse en un referente político significativo, siendo su mayor debilidad, la débil relación con los sectores populares. No obstante, el Frente Amplio nace con la intención de dar una respuesta a la crisis de representación de la que hablábamos anteriormente, y que desató el gran estallido social que nos atiene en este trabajo.

En el caso ecuatoriano, la CONAIE, desde su conformación en 1980, tuvo un papel central en el mapa político formando parte y liderando los movimientos que derrocaron

a tres presidentes ecuatorianos, algo que nunca logró, por ahora, el movimiento estudiantil en Chile. Sus reclamos históricos fueron la consolidación de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, la lucha por la tierra y territorios indígenas, por una educación propia (intercultural bilingüe), contra la opresión de las autoridades civiles y eclesiales, por la identidad cultural de pueblos indígenas, contra el colonialismo y por la dignidad de pueblos y nacionalidades indígenas. En 1995 estas demandas fueron canalizadas por la creación de un brazo político de izquierda, llamado *Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik*. La CONAIE, de la que 40.000 de sus miembros se movilizaron a inicios del pasado mes de octubre, ocupó un rol central durante el gobierno de Rafael Correa, obteniendo, entonces, una simbólica victoria cuando se reconoció en la reforma de la Constitución en el 2008, la plurinacionalidad del Estado, el agua como derecho humano y la economía social y solidaria como principio rector de la economía. Sin embargo, durante la institucionalización de esos derechos se produce el quiebre con Correa, donde el permiso que otorgó éste al extractivismo en terrenos indígenas supuso la ruptura definitiva (Boccacci). Si un relativo agotamiento de la movilización social antecedió el surgimiento de *Alianza País*, el sólido posicionamiento del liderazgo presidencial y su escasa predisposición al reconocimiento de las dinámicas de acción colectiva autónoma habían intensificado el conflicto con el gobierno, pues desde hacía cerca de más de dos décadas que las dinámicas de movilización social giraban o eran lideradas por el movimiento indígena, que había sido el actor hegemónico del campo popular. Leyes controversiales en favor de un claro patrón de desarrollo contribuyeron a esa constante tensión y beligerancia entre Correa y las organizaciones sociales durante su mandato, y fue ello lo que alejó a la CONAIE de *Alianza País* y concretamente, del *correísmo*, del que se ha querido desvincular en este estallido social y que también lo acerca, en cierto modo, a Lenin Moreno. (Ramírez Gallegos, 2010).

Como vemos, en el caso ecuatoriano, el papel del movimiento indígena ha sido mucho más activo en la escena política, en la articulación de las demandas y en la capacidad de liderazgo de oposición al neoliberalismo, que con respecto al movimiento estudiantil chileno.

3. Conclusiones

En definitiva, estamos enfrente de dos estallidos sociales que aparentemente pueden tener puntos de contacto pero que inmediatamente, cuando se analizan pormenorizadamente las causas, el proceso, la articulación de las demandas y su liderazgo, se observan evidentes diferencias.

Aunque se hable del transporte como génesis, en uno, es tan solo el catalizador de una demanda mucho mayor, un proceso constituyente, un cambio de sistema económico - social neoliberal, diseñado durante una dictadura cuya herencia se observa en el día a día del ciudadano chileno; en el otro, es la demanda principal, la demanda en sí misma, con el fin de evitar sumergirse, precisamente, en ese sistema neoliberal. En ambos casos, se pretende protestar contra el neoliberalismo, en forma de sistema o en forma de medidas tendentes a implantar el sistema. Sin embargo, esa protesta indígena y estudiantil difieren en su ejecución. Por un lado, la chilena, de carácter claramente centrífugo (de la capital a las principales ciudades), y por otro, la ecuatoriana, con un fuerte carácter centrípeto (de las zonas periféricas a la capital), son lideradas de forma diversa, pues el movimiento indígena es el que va adquiriendo importancia en las movilizaciones, hasta tal punto que se convierten, como tradicionalmente siempre han sido o pretendido ser, los únicos interlocutores del gobierno de lo que queda de AP, mientras que, en el movimiento estudiantil chileno ocurre lo inverso, con el transcurso de las movilizaciones, su protagonismo se va atenuando con la incorporación cada vez más amplia de la sociedad chilena pese a que ellos fueron los que catalizaron el proceso. Como resultado, adquirió un alto grado de espontaneidad y acefalía de la que carecía el estallido ecuatoriano. En ambos casos, los militares y policías respondieron con dureza para reprimir las manifestaciones. Esta represión militar generó duros enfrentamientos con los protestantes, pero como ocurre en toda represión, las fuerzas represivas empezaron a mostrar quiebres en las cadenas de mandos y un significativo número de militares de ambos países salieron en la defensa de los manifestantes en ambos países. Después de esa primera reacción de ignorar la magnitud de las protestas y de reprimir a ambos movimientos, los gobiernos, después de retirar las polémicas medidas, que defendieron desde la inevitabilidad tecnocrática unos, y la necesidad financiera otros, emprendieron rumbos distintos, en función de la existencia de un diálogo. Como hemos afirmado a lo largo del trabajo, fue fácil en Ecuador por la cultura participativa y

organizativa del movimiento indígena y de la sociedad en su conjunto, algo de lo que carece Chile, donde la despolitización de la sociedad durante décadas imposibilitó ello y, por consiguiente, no se produjo ningún tipo de diálogo. Esto, sumado a la magnitud de la demanda, es lo que permitió que aún continúen las movilizaciones chilenas, y no las ecuatorianas.

El estallido en Ecuador ya acabó, en Chile, aún no. Continúa el estado de emergencia y continúan las protestas en la calle. En el pasado octubre Mario Garcés acertó afirmando que el conflicto y la inestabilidad se iban a prologar, generando o bien, “un empate catastrófico”, o una poco probable salida golpista, o bien, un fortalecimiento de la movilización y los movimientos sociales que debiera tener como horizonte un “proceso constituyente” para lo cual era necesario una coordinación social y política suficiente que impidiese que la energía desatada termine disipándose. Es en este proceso en el que se encuentra actualmente Chile, cuando “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”. En esto acertó, y ahora, todo apunta un el inicio de un proceso constituyente. Porque como señala Noam Titelman, lo natural cuando una sociedad cambia es que los términos del acuerdo social cambien, pero, precisamente, la institucionalidad chilena, pretende evitar eso. Sin embargo, la única certeza que podemos extraer del estallido social es que el Chile de hoy, gracias a su pueblo movilizado, ya no es el mismo que el de ayer. (Garcés, 2019)

Y, es que podemos concluir afirmando que estos movimientos sociales han hecho que sea posible rediscutir estas cuestiones en la política, al mismo tiempo que han hecho crujir las relaciones de representación política. Incluso la nueva izquierda chilena, encarnada en el Frente Amplio y heredera directa de la movilización de 2011, se ha encontrado con las movilizaciones actuales como espectadora, desde el lado de los representantes políticos, así como lo que queda de Alianza País o los parlamentarios correístas, de los que se han distanciado desde el principio el movimiento indígena. Ambos estallidos se dieron por fuera de los espacios de representación política y fueron ejemplos para toda la región de lo que desde la acción colectiva es posible conseguir, simplemente, reaccionando, o bien, frente a un potencial cambio del esquema de vida, como ocurre en Ecuador, o bien, frente a un hartazgo inconmensurable y acumulativo desde hace varias décadas, como ocurre en Chile. Ambos hicieron de sus países del mañana, algo distintos, a sus países del ayer.

REFERENCIAS

- Azócar, C. y Mayol, A. (2011). Politización del malestar, movilización social y transformación ideológica: el caso “Chile 2011”. Revista de la Universidad Bolivariana. Vol. 10, nº30, p. 163-184. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v10n30/art08.pdf>
- Boccacci, J. (11 de octubre de 2019). Conaie: el movimiento indígena que hace temblar a Lenin Moreno. <https://www.pagina12.com.ar/224622-conaie-el-movimiento-indigena-que-hace-temblar-a-lenin-moren>
- Detsch, C (2019). Los desafíos de la nueva izquierda chilena. Revista Nueva Sociedad. <https://www.nuso.org/articulo/beatriz-sanchez-entrevista-nueva-izquierda-chile-frente-amplio/>
- Ecuador: rebelión histórica torció el brazo al Gobierno (14 de octubre de 2019). <https://www.anred.org/2019/10/14/ecuador-rebelion-historica-torcio-el-brazo-al-gobierno/>
- Ecuador: movilización histórica en Quito hace huir al gobierno a Guayaquil. (08 de octubre de 2019). <https://www.anred.org/2019/10/08/movilizacion-historica-en-quito-hace-huir-al-gobierno-a-guayaquil/>
- Garcés, M. (2019). Octubre de 2019: Estallido social en el Chile neoliberal. <http://cedmchile.org/2019/10/24/octubre-de-2019-estallido-social-en-el-chile-neoliberal/>
- Huelga general y ocupación de pozos petroleros en Ecuador (09 de octubre de 2019). <https://www.anred.org/2019/10/09/huelga-general-y-ocupacion-de-pozos-petroleros-en-ecuador/>
- Ominami, C. (2018). Chile: el segundo suicidio de la centroizquierda. Revista Nueva Sociedad. <https://www.nuso.org/articulo/chile-el-segundo-suicidio-de-la-centroizquierda/>
- Ospina, P. (2019). Ecuador contra Lenin Moreno. Revista Nueva Sociedad. <https://www.nuso.org/articulo/ecuador-lenin-moreno/>
- Ospina, P. (2019). ¿Realmente hay un giro a la derecha? Del correísmo al Leninismo. Revista Nueva Sociedad. <https://www.nuso.org/articulo/ecuador-moreno-correa-elecciones-politica/>

Paúl, F. (23 de octubre 2019). Protestas en Chile: 4 claves para entender la furia y el estallido social en el país sudamericano. BBC News mundo.

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50115798>

Paúl, F. (21 de octubre 2019). Protestas en Chile: las 6 grandes deudas sociales por las que muchos chilenos dicen sentirse "abusados". BBC News mundo.

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50124583>

Paúl, F. (22 de octubre 2019). Protestas en Chile y Ecuador: ¿en qué se parecen y diferencian las últimas revueltas sociales en estos dos países?. BBC News mundo.

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50139272>

¿Qué estalla en Ecuador? (04 de octubre de 2019).

<https://www.anred.org/2019/10/04/que-estalla-en-ecuador/>

Ramirez Gallegos, F. (2010). Desencuentros, convergencias, polarización (y viceversa).

Revista Nueva Sociedad. N° 227. <https://www.nuso.org/articulo/desencuentros-convergencias-politizacion-y-viceversa-el-gobierno-ecutoriano-y-los-movimientos-sociales/>

Ramirez Gallegos, F. (2018). Ecuador: legitimación neoliberal y dilemas de crítica.

Revista Nueva Sociedad. <https://www.nuso.org/articulo/ecuador-legitimacion-neoliberal-y-dilemas-de-la-critica/>

Salazar Vergara, G. (2019). El «reventón social» en Chile. Revista Nueva Sociedad.

<https://www.nuso.org/articulo/protestas-Chile-estudiantes-neoliberalismo/imprimir/>

Schwabe, N. (2018). “No somos hijos de la democracia sino nietos de la dictadura”.

Revista Nueva Sociedad. <https://www.nuso.org/articulo/no-somos-hijos-de-la-democracia-sino-nietos-de-la-dictadura/>

Titelman, N. (2019). Fuego y furia en el «oasis» chileno. Revista Nueva Sociedad.

<https://www.nuso.org/articulo/fuego-en-el-oasis-chileno/imprimir/>

Toer, M. (2018). De Moctezuma a Chávez. Repensando la Historia de América Latina, Buenos Aires: Ediciones Cooperativas, 2018.

Vergara, Pilar (1982). Transformaciones del Estado Chileno bajo el régimen militar. En Chile: 1973-198? (pp. 65-104). Santiago de Chile.